

I. INTRODUCCIÓN

A) ANTECEDENTES

Derivado de las continuas crisis financieras que se desarrollaron en muchos países del orbe a partir de la década de los setentas, afectando profundamente las variables macroeconómicas cuyo control es responsabilidad de los Bancos Centrales, se confirmó la tesis planteada hace algún tiempo en el sentido que debe haber una adecuada coordinación entre la política monetaria a cargo del Banco Central y las políticas de supervisión del sistema financiero.

Por esta situación y con el objetivo de reducir las posibilidades de crisis bancarias principalmente internacionales y así, minimizar los efectos de estas en la estabilidad de sus economías, los gobernadores de los Bancos Centrales de los países del G-10 (Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos), en 1975, crearon el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, conformado por sus autoridades de supervisión, que en la mayoría de casos eran los propios Bancos Centrales.

Este Comité no debe considerarse como una autoridad de supervisión supranacional, sino más bien como un organismo que persigue proveer a sus miembros de estándares y guías de supervisión para mejorar sus prácticas, con la expectativa que las autoridades de cada país tomen las medidas que faciliten su implementación y a través de esto, lograr una mejora en la posición internacional de sus propios sistemas nacionales.

Dentro del trabajo desarrollado por el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, en 1988 se decidió introducir un sistema de adecuación de capital comúnmente conocido como el Acuerdo de Capital de Basilea, con el que se pretendía implementar un sistema de medición del riesgo de crédito con un mínimo estándar de capital del 8% para finales de 1992. Este documento es hoy día una declaración del Comité, acordado por todos sus miembros y establece los detalles de la estructura convenida para la medición de la adecuación de capital y el estándar mínimo que debe implementarse en cada uno de los países. Es importante mencionar que al Acuerdo original se le han introducido modificaciones en los años 1991, 1994 y 1995, relacionadas con las provisiones generales, la calificación para la medición del riesgo y referente a ciertos rubros fuera del balance. Adicionalmente, en enero de 1996 se introdujo una modificación importante para incorporar a los requerimientos de capital el riesgo de mercado.

La experiencia obtenida durante más de una década de aplicación del Acuerdo de Capital de Basilea y el diálogo continuo con la industria y con

los supervisores bancarios alrededor del mundo han permitido al Comité desarrollar enfoques de medición estandarizados e internos a la adecuación de capital más sensibles al riesgo, promoviendo la adopción de un nuevo marco de referencia que intenta alinear más cercanamente la evaluación de suficiencia de capital con los elementos claves de los riesgos bancarios, proveyendo incentivos para que los bancos mejoren sus capacidades de medición y administración del riesgo.

El Comité ha tomado en consideración que han ocurrido cambios significativos en los negocios bancarios, en las prácticas de manejo del riesgo y en los sistemas de supervisión, por lo que en Junio de 1999 propuso reemplazar el Acuerdo de 1988, esperando que las partes interesadas emitan sus comentarios por el 31 de mayo de 2001 y estar en capacidad de divulgar el contenido del nuevo Acuerdo a finales de este año y que sea implementado a más tardar en 2004.

B) BREVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA BANCARIO GUATEMALTECO Y DE SU AUTORIDAD SUPERVISORA

El sistema bancario guatemalteco se encuentra conformado por 29 bancos privados nacionales (3 de ellos se encuentran sujetos a intervención administrativa dictada por la Junta Monetaria), 2 bancos estatales, uno de los cuales se encuentra en proceso de liquidación, 2 sucursales de bancos extranjeros y 19 sociedades financieras privadas (la Superintendencia de Bancos solicitó a la autoridad competente se declarara la quiebra de una de ellas en el año 2000).

Estas instituciones se rigen por el contenido de la Ley de Bancos, de la Ley de Sociedades Financieras Privadas, leyes específicas en el caso de las entidades estatales y mixtas y en lo aplicable por la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. En lo que se refiere a las proporciones mínimas de capital se cuenta con el artículo 20 de la Ley de Bancos, aplicable a las Sociedades Financieras Privadas, en el que señala que el monto mínimo de patrimonio requerido a todas las instituciones es del 10% aplicado en forma ponderada al riesgo a sus activos y contingencias.

En este mismo artículo se señala que el patrimonio computable se integra por una porción de capital primario y otra de capital complementario, identificando claramente los rubros que conforman cada uno de los renglones mencionados, estableciendo también un máximo de capital complementario aceptable dentro de la estructura del patrimonio computable. Sobre este tema es importante señalar que los bancos estarán alcanzado el nivel mencionado en el mes de septiembre del presente año y las sociedades financieras privadas en marzo de 2003.

Se considera muy atinada la decisión de haber dejado abierta la posibilidad para que la Junta Monetaria incremente el nivel de requerimientos a

solicitud de la Superintendencia de Bancos, con lo que se hace factible incorporar las enmiendas que el Comité ha emitido y que tienen como efecto mejorar la medición del riesgo y que éste sea adecuadamente cubierto a través de patrimonio efectivo.

En lo que se refiere al órgano supervisor, el último párrafo del artículo 133 de la Constitución Política de la República establece que es la Superintendencia de Bancos la institución que tiene a su cargo ejercer la supervisión del sistema bancario, norma que es desarrollada a través de los artículos 43 al 52 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, definiéndose en ellos a la Superintendencia de Bancos como un órgano de banca central, eminentemente técnico, que actúa bajo la dirección general de la Junta Monetaria y ejerce la vigilancia e inspección del Banco de Guatemala, bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras, de seguros y las demás que la ley disponga. El Superintendente de Bancos es la autoridad administrativa superior de la Superintendencia de Bancos y es nombrado por la Junta Monetaria para un período de cuatro años.

Con respecto a los requerimientos de capital, el Superintendente de Bancos, legalmente, puede solicitar la constitución de reservas o provisiones en proporciones que excedan el 10% mínimo que señala el artículo 20, si a su juicio las inversiones a que se refiere el mismo artículo fueren de recuperación dudosa. Esta facultad está contenida en el artículo 21 de la Ley de Bancos.

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Tomando en cuenta la importancia de los pronunciamientos emitidos por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, principalmente los efectos que produce internacionalmente la adopción de sus estándares, la Asociación Bancaria de Guatemala, con el propósito de contar con los suficientes elementos de juicio para hacer llegar su posición acerca del Nuevo Acuerdo de Capital, que se encuentra sujeto a consultas dentro de la industria a nivel mundial, contrató a la empresa BanConsult, S. A., para que realizara un análisis y evaluación del contenido del Nuevo Acuerdo, con el propósito de establecer las modificaciones más relevantes con respecto al Acuerdo de Convergencia Internacional de Medición y Estándares de Capital actualmente en vigor y determinar si el marco legal de Guatemala es lo suficientemente flexible para que se acomoden las nuevas regulaciones sobre requerimientos de capital.

La evaluación se extiende al proyecto de Ley de Bancos y Grupos Financieros que ya fue aprobado por la Junta Monetaria y está por remitirse al Organismo Ejecutivo para que lo traslade al Congreso de la República como iniciativa de ley.

El equipo consultor de BanConsult, S. A., esta integrado por:

Lic. Roberto A. Gutiérrez N., Contador Público y Auditor egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dentro de los cargos desempeñados se encuentra el haber sido Superintendente de Bancos durante el período comprendido de 1995 a 2000 y haber laborado por más 17 años en diferentes cargos en el Banco de Guatemala. A nivel internacional fue Presidente de la Asociación de Superintendentes de Seguros de América Latina; Vicepresidente de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas y Presidente del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y otras Instituciones Financieras.

Ing. Rafael Viejo, Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y Maestría en Ingeniería Industrial de Louisiana State University. Carrera en el sistema financiero guatemalteco donde fue Gerente General de Financiera Guatemalteca, S. A.; fundador y Gerente General de Banco de Exportación, S. A.; fundador y Presidente del Consejo de Administración en Aseguradora de la Nación, S. A., de Almacenadora de la Nación, S. A., de Afianadora de la Nación, S. A. y de BancaRed (red de cajeros automáticos y terminales de punto de venta para tarjetas electrónicas). Ha sido Presidente de la Cámara de Finanzas de

Guatemala y de la Asociación Bancaria de Guatemala. Ha sido designado por los Bancos Privados como miembro de la Junta Monetaria, en varias ocasiones. Coordinó la Comisión de Modernización del Sistema Bancario, desde su creación en 1991, hasta el año 2000.

Lic. Alejandro Arenales Farner, Abogado y Notario Público con Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Ha sido profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Francisco Marroquín y en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Actualmente, es Vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo – IIDM-, Arbitro de la Comisión de Resolución de Conflictos y Arbitraje de la Cámara de Industria –CRECIG- y del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio –CENAC-, miembro de *International Bar Association* –IBA-, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala –CANG-, de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial –ASIPI-, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana –AMCHAM- y de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Alemana. También ha sido miembro fundador y de la Junta Directiva de compañías nacionales e internacionales y de diversas instituciones financieras y bursátiles en Guatemala. En materia de instituciones financieras, entre otros cargos, ha sido Asesor de la Superintendencia de Bancos; Director del Banco Inmobiliario y de Corporación Financiera Nacional, en ambos casos, por nombramiento de la Junta Monetaria en aplicación del Decreto 7-72 del Congreso de la República; Fundador y Director de Bolsa Agrícola Nacional, S. A. y Corporación Bursátil, S. A.; Asesor Legal de la Asociación de Almacenes Generales de Depósito, del Banco Privado para el Desarrollo, S. A. y del Banco Agrícola Mercantil de Guatemala, S. A.

Lic. Alfredo Skinner-Klée, Abogado y Notario Público con Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Posee estudios de pos-grado realizados en *Miami University School of Law*, 1981 (M.C.L.) y en *Hague Academy of International Law*, 1982 (*UN Fellow in International Law*). Trabajó en *Conboy, Hewit, O'Brien & Boardman* en Nueva York, USA, 1982, y fue miembro del Parlamento Centroamericano, 1990-1995. Actualmente, es miembro del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala –CANG- y ha sido miembro de la Junta Directiva del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio –CENAC. También es miembro fundador y de la Junta Directiva de compañías nacionales e internacionales en Guatemala. En materia de instituciones financieras, entre otros cargos, ha sido Asesor Legal de *Bank of America*, *Hamilton Bank*, *Overseas Private Investment Corporation*.

III. ACUERDO DE CONVERGENCIA INTERNACIONAL DE MEDICION Y ESTANDARES DE CAPITAL

A) ANTECEDENTES

Este acuerdo entró en vigor en Julio de 1988, después de haber sido sometido a consulta en todos los países del G-10 y a las autoridades de supervisión de todo el mundo y establece los detalles de la estructura convenida para la medición de la adecuación de capital y el estándar mínimo que debe alcanzarse. Esta normativa se emitió con el propósito que su estructura sirviera para fortalecer la solidez y estabilidad del sistema bancario internacional y a la vez para que sea aplicado en forma razonable y consistente para disminuir las desigualdades competitivas entre bancos internacionales, fundamentado por un grupo de principios conceptualmente sólidos que se adapten a los sistemas actuales de supervisión y contabilidad en los países considerados individualmente.

La estructura de este Acuerdo esta dirigida principalmente hacia la evaluación del capital con relación al riesgo de crédito, por lo que su fortaleza depende de la calidad de los activos y del nivel de provisiones con que se cuente para hacer frente a los activos de dudosa recuperación.

B) ESTRUCTURA DEL ACUERDO

El Acuerdo de Convergencia Internacional de Medición y Estándares de Capital se divide en tres secciones, así:

C) Sección I, Componentes de Capital

D) Sección II, Sistema de Medición de Riesgos, y

E) Sección III, Coeficiente Estándar

A continuación se hace un breve análisis de cada una de las secciones emitiendo algunos comentarios acerca de la forma en que Guatemala ha adoptado estos criterios, principalmente en aquellos casos en que la legislación guatemalteca no recoge la filosofía del Acuerdo, tomando en cuenta que su estructura esta acordada para establecer niveles mínimos de capital para los bancos internacionalmente activos y que las autoridades nacionales son libres de adoptar regulaciones con niveles más altos.

Sección I, Los Componentes del Capital

Para el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria el capital resulta un elemento clave sobre el que se hace énfasis, principalmente porque es el único elemento común a todos los sistemas bancarios de los países, totalmente visible en las cuentas publicadas y sobre el cual se hace la

mayoría de juicios sobre la adecuación de capital, sus márgenes de rentabilidad y la capacidad de los bancos para competir en el mercado.

En ese contexto, el capital es dividido en dos componentes, formado el primero por el capital esencial (patrimonio básico), representado por el capital pagado (acciones comunes suscritas y pagadas) y aquellas reservas publicadas, tomadas de las utilidades establecidas después de impuestos, cuya distribución entre los accionistas no es factible. En el caso de Guatemala una reserva de este tipo es la Reserva Legal, creada con fines de apuntalar el capital de las sociedades anónimas.

Al segundo componente se le denomina Capital Complementario, cuyo monto es admitido hasta por el 100% de capital esencial y está integrado por los conceptos siguientes;

- **Reservas no divulgadas**

Son aquellas que se constituyen de acuerdo a los regímenes legales y de contabilidad de los países, incluyéndose únicamente las que han pasado por pérdidas y ganancias y son aceptadas por las autoridades de supervisión de los bancos.

En el caso de Guatemala, no se acepta este tipo de reservas en virtud que carecen de transparencia y por lo tanto la legislación no reconoce como parte del capital este elemento.

- **Reservas de Revaluación**

Surgen de la revaluación de activos con el propósito que reflejen su valor actual y se considera que estas reservas pueden ser incluidas entre los elementos complementarios de capital porque pueden utilizarse para absorber pérdidas sobre una base permanente, pero no como parte del capital esencial porque están sujetas a descuentos sustanciales en el momento de su realización.

- **Reservas Generales para Préstamos**

Estas reservas califican para formar parte del capital complementario únicamente en aquellos casos en que no reflejan un deterioro conocido en la valuación de activos particulares. El monto esta limitado a 1.25 puntos porcentuales de los activos ponderados de riesgo.

- **Instrumentos híbridos de deuda capital**

En esta categoría se incluyen todos aquellos instrumentos que combinan ciertas características de patrimonio y ciertas características de deuda. Estos instrumentos son aceptables como capital complementario cuando tienen mucha similitud con el patrimonio, principalmente en los que se refiere a su capacidad para absorber pérdidas sobre una base permanente sin provocar liquidación.

- **Deuda subordinada a término**

El hecho de que estos instrumentos tienen significativas deficiencias como componentes de capital en vista de su vencimiento fijo y de su incapacidad para absorber pérdidas, excepto en una liquidación, es la razón de mayor peso para que la deuda subordinada a término únicamente sea aceptada hasta por un 50% del capital esencial y sujeto a convenios adecuados de amortización.

Dentro de esta Sección de Componentes de Capital, el Comité establece que al patrimonio computable debe deducirse el Derecho de Llave o Crédito Mercantil, así como las inversiones en subsidiarias bancarias y financieras y que no son consolidadas en sistemas nacionales. Se hace la aclaración que la deducción de las inversiones en subsidiarias se aplica únicamente en el caso en que no se presenten estados consolidados porque para el Comité, la práctica de utilizar normas para la evaluación de adecuación de capital de grupos bancarios debe realizarse sobre bases consolidadas.

En el caso de la legislación vigente de Guatemala se considera que recoge adecuadamente esta Sección, en virtud que el artículo 20 de la Ley de Bancos plantea los dos componentes de capital en la forma en que lo establece el Acuerdo de Capital de Basilea. Únicamente hay tres aspectos que señalar y que deberían incorporarse a los proyectos a través de los cuales se modificaría el marco regulatorio del sistema bancario.

El primero se refiere a que la legislación acepta como parte del patrimonio básico las ganancias por aplicar de ejercicios contables anteriores después de impuestos y que de conformidad con el Acuerdo estas deben considerarse como parte del capital complementario dentro del rubro de reservas no divulgadas, en virtud que a pesar de ser ganancias de ejercicios anteriores no se ha definido su destino y éste obviamente puede ser una repartición de dividendos. Únicamente se debería tomar como parte del patrimonio básico cuando se haya definido que pasarán a formar parte del

capital accionario o bien a través de la formación de reservas inamovibles que respalden el capital pagado del banco.

En segundo lugar, en el capital complementario se incluyen las utilidades del ejercicio, las cuales no se deberían utilizar porque están sujetas a eventos dentro del período contable y sujetas a efectos exógenos a la propia institución. Es claro que para Basilea las reservas que se constituyan deben provenir de ganancias de ejercicios anteriores después de impuestos. Las ganancias de un ejercicio que no se ha cerrado no deben considerarse como parte del capital para efectos de establecer el patrimonio computable.

Estas dos discrepancias entre la normativa bancaria Guatemalteca y el acuerdo de Basilea, tienen su origen en que al legislador Guatemalteco le pareció permisible aceptarlas, dado que la misma legislación prevé que ni las utilidades de ejercicios anteriores, ni las utilidades del ejercicio pueden distribuirse a los accionistas de las instituciones bancarias, si esta distribución produce o agrava una deficiencia de capital. En otras palabras, mientras estos rubros sean necesarios para mantener relaciones mínimas de capital a activos de riesgo, están anclados y no son distribuibles.

A pesar de que hay cierta lógica en la razón de estas discrepancias, lo cierto es que a la luz de los estándares internacionales, la legislación Guatemalteca no se ajusta a las normas de Basilea en estos temas.

Finalmente, nuestra legislación no contempla que del patrimonio computable debe deducirse el Derecho de Llave o Crédito Mercantil, aspecto que podría tornarse importante en los momentos actuales en que se producen fusiones y adquisiciones dentro de nuestro sistema bancario.

Sección II, Sistema de Medición de Riesgos

A través de este sistema se ha logrado establecer un coeficiente ponderado de riesgos que relaciona el capital con las diferentes categorías de activos o de exposiciones fuera de balance, ponderado de acuerdo a categorías amplias de riesgo relativo, el cual proporciona una base más razonable para la realización de comparaciones internacionales entre los sistemas bancarios y facilita la incorporación en la medición de las exposiciones fuera de balance.

La estructura de la ponderación del riesgo es bastante simple, utilizándose únicamente cinco niveles. El enfoque central de esta estructura es el riesgo crediticio, quedando a discreción de las autoridades supervisoras de cada país, en aquellos casos en que tienen esta facultad, la inclusión de

otros tipos de riesgos como el de inversiones, de tasa de interés, de tasas de cambios, de concentración de crédito, etc.

Dentro de la estructura de ponderación se hace especial énfasis a los riesgos de transferencia de países, los créditos a gobiernos no centrales y entidades del sector público, las garantías y colaterales, los préstamos garantizados sobre propiedad residencial y las cuentas fuera de balance.

En el caso de la legislación guatemalteca, es conveniente mencionar que se adopta adecuadamente la estructura de ponderación establecida en el Acuerdo de Capital de Basilea, siendo únicamente discutible la ponderación de 0% para los Gastos Diferidos por Amortizar, los cuales deberían reducirse del patrimonio computable, en virtud que no se recuperaran y que afectarán precisamente ese patrimonio durante el período de amortización. La filosofía del 0% implica que no hay riesgo en cuanto a su recuperación y los gastos diferidos por amortizar, por definición, son irrecuperables.

Sección III, Coeficiente Estándar

El estándar mínimo acordado por el Comité debe ser del 8%, nivel que se considera consistente con el objetivo de asegurar coeficientes sólidos de capital para todos los bancos internacionales.

En el caso de Guatemala, el porcentaje mínimo establecido es del 10%, el cual se encuentra en proceso de completación actualmente. Es conveniente señalar que aunque el porcentaje es más alto que el acordado por el Comité de Basilea, la mayor deficiencia del nuestro es que no se aplica sobre bases consolidadas, quedando riesgos descubiertos por operaciones entre compañías no sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos.

IV. NUEVO ACUERDO DE CAPITAL DE BASILEA

A) INTRODUCCIÓN

La continua revisión de las operaciones bancarias ha permitido que el Comité de Basilea identifique plenamente la necesidad de establecer un Nuevo Acuerdo de Capital que asegure que para la adecuación del capital consolidado se incluyan todos los riesgos y que se evite el doble apalancamiento, que surge cuando una entidad mantiene capital regulatorio emitido por otra entidad dentro del mismo grupo y al emisor se le permite computar el capital en su balance general. Para maximizar su efectividad, el Nuevo Acuerdo debe capturar a través de la consolidación todas las actividades bancarias y otras actividades financieras relevantes conducidas dentro de los grupos bancarios, con excepción de los riesgos de seguros, pues éstos se consideran como un riesgo diferente que hace que la consolidación de una subsidiaria de seguros no sea apropiada bajo los lineamientos del nuevo acuerdo.

El Nuevo Acuerdo es más extenso y complejo que el Acuerdo de 1988 y como diferencias fundamentales enfatiza el papel del proceso de revisión del supervisor bancario y la disciplina de mercado como componentes esenciales adicionales a los requerimientos mínimos de capital. La complejidad del Nuevo Acuerdo tiene su propia sustentación en el natural avance de la industria y en la complejidad de sus operaciones.

El Comité señala que para alcanzar los objetivos previstos para la adecuación de capital, principalmente en lo que se refiere a seguridad y solidez, son insuficientes los requerimientos mínimos de capital, si estos no se hacen acompañar de una adecuada revisión del ente supervisor y de la transparencia que se logra a través de la disciplina de mercado.

Resulta evidente que la implementación propia del acuerdo debe tomar en cuenta el ambiente financiero, legal, de supervisión y de mercado en el que cada banco en particular opera, esperándose que tales medidas contribuyan a fomentar la mejora continua en las prácticas de administración de riesgo en el ámbito de toda la industria.

B) AMBITO DE APLICACIÓN

El Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea se aplicará en forma consolidada a los bancos internacionalmente activos, entendiéndose por bancos internacionalmente activos aquellas instituciones que tienen la capacidad de trasladar riesgos a otros países distintos a aquellos en que se encuentran constituidos. Pareciera que bajo este concepto se incluyen a los grandes

bancos de los países desarrollados que cuentan con grandes exposiciones de riesgo en otros países, principalmente en los llamados países de mercados emergentes y que forman parte de grupos bancarios más grandes.

Por esta razón y porque se considera que un banco en la actualidad mantiene exposiciones de riesgo a través de su vinculación con otras empresas, es que el acuerdo se aplica en forma consolidada, como única forma de preservar la integridad del capital en bancos con filiales, eliminando el doble apalancamiento y se extiende a las sociedades matrices de los grupos bancarios, asegurando de esta manera que todos los riesgos del grupo bancario estén comprendidos dentro de dicho ámbito.

En ese sentido y tomando en cuenta el enfoque consolidado, el Nuevo Acuerdo claramente establece que es aplicable a las filiales de valores y otras filiales financieras entre las que se incluye a las sociedades que se dedican al arrendamiento financiero, la emisión de tarjetas de crédito, administración de carteras, asesoría para la inversión, servicios de custodia y otras actividades similares que son de apoyo al giro bancario. En el caso de las filiales de seguros, aunque se reconoce que el banco que la posee asume todos los riesgos empresariales de la misma y la debe tomar en cuenta para medir los riesgos del grupo en su totalidad, es preferible que para efectos de adecuación de capital se proceda a deducir las inversiones realizadas en filiales de seguros, dados los diferentes métodos utilizados para medir el capital. En Guatemala, en el caso de las aseguradoras se usan los parámetros de margen de solvencia y fondo de garantía para medir la suficiencia del capital con respecto al riesgo tomado en la operación de seguros.

Finalmente, se señala que las participaciones minoritarias que no le proveen influencia significativa al Banco accionista deben deducirse del capital del grupo bancario.

En todo caso, en nuestra opinión para efectos de consolidación deben tomarse en cuentas las Normas Internacionales de Contabilidad No. 22, Combinaciones de Negocios; No. 27, Estados Financieros y contabilización de inversiones en subsidiarias; y, No. 28, Contabilización de Inversiones en Empresas Asociadas.

Aunque el enfoque de aplicación del nuevo marco de referencia está dirigido principalmente a los bancos internacionalmente activos, sus principios subyacentes se adecúan para su aplicación a bancos de diferentes niveles de complejidad y sofisticación, de tal modo que tales principios sean aplicables para todos los tipos de bancos alrededor del globo.

C) ESTRUCTURA

El Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea está basado en tres pilares íntimamente relacionados y que son considerados como un solo paquete, por lo que su implementación será considerada completa hasta que se hayan incorporados los tres pilares en su totalidad. Estos pilares son los requisitos de capital mínimo, el proceso de revisión del supervisor y la disciplina de mercado, cuyos comentarios se presentan a continuación.

EL PRIMER PILAR – REQUISITOS DE CAPITAL MINIMO –

Este pilar esta integrado por los elementos que se describen a continuación:

CALCULO DEL REQUISITO DE CAPITAL MINIMO

Esta parte trata sobre el cálculo del capital mínimo obligatorio total para el riesgo crediticio, de mercado y operativo, compuesto por tres elementos fundamentales como lo son la definición del capital regulado, activos ponderados por riesgo y la relación mínima capital-activos ponderados por riesgo. El cálculo del coeficiente de capital mínimo deberá realizarse en la forma siguiente:

“Al calcular el coeficiente de capital, el denominador o total de activos ponderados por riesgo se determina multiplicando el capital mínimo obligatorio por riesgos de mercado y riesgo operativo por 12.5 (la recíproca del coeficiente mínimo de capital del 8%) y adicionando las cifras resultantes a la suma de activos ponderados por riesgo compilados para el riesgo crediticio. El coeficiente se calculará en función del denominador, utilizando el capital regulador como numerador. La definición de capital admisible será la definición del Acuerdo de 1988. El coeficiente no podrá ser inferior a 8% para el capital total.”

Como puede observarse el capital mínimo del nuevo Acuerdo no se calcula únicamente con base en las ponderaciones de riesgo, sino que se incorporan conceptos más avanzados como riesgo de mercado y operacional que no contenía el Acuerdo de 1988, el cual está fundamentado principalmente en el riesgo crediticio y contempla algunos mecanismos para la medición del riesgo por transferencia de países y el riesgo de mercado.

Para medir el primer elemento del capital regulatorio, el Comité propone permitir a los bancos escoger entre dos metodologías para medir el riesgo crediticio. A través de uno de los métodos se mediría el riesgo en forma estandarizada y la otra permitiría a los bancos utilizar sistemas de clasificación internos sujetos a la aprobación del ente supervisor.

El método estándar plantea revisiones del Acuerdo de 1988 relacionadas con la ponderación por concepto de riesgo de la cartera de créditos, pudiéndose utilizar evaluaciones realizadas por las instituciones de evaluación de crédito externas (calificadoras de riesgo) reconocidas como admisibles por los supervisores nacionales, las que deben satisfacer criterios de objetividad, independencia, acceso internacional, transparencia, divulgación, recursos y credibilidad, quedando bajo la responsabilidad de los supervisores nacionales establecer si una institución de evaluación de crédito externa cumple o no con estos requisitos.

Es importante señalar que la ponderación del riesgo se fundamenta en la calificación de riesgo país emitida por las calificadoras de crédito reconocidas (En el Acuerdo se utiliza la de Standard & Poors como ejemplo), o los puntajes o calificaciones que dan los Organismos de Crédito de Exportación. Una vez establecida la calificación de riesgo país la ponderación se aplica en función del deudor, dividiendo la cartera en los elementos siguientes:

- (i) *préstamos con estados soberanos y bancos centrales*
- (ii) *préstamos con entidades del sector público no pertenecientes al gobierno central*
- (iii) *préstamos con bancos multilaterales de desarrollo*
- (iv) *préstamos con bancos*
- (v) *préstamos con compañías de valores*
- (vi) *préstamos con empresas*
- (vii) *préstamos garantizados con propiedad residencial*
- (viii) *préstamos garantizados con bienes raíces comerciales*
- (ix) *categorías de mayor riesgo*
- (x) *otros activos*
- (xi) *partidas fuera del balance general*

Es importante señalar que a diferencia del Acuerdo de 1988, el nuevo Acuerdo contempla ponderaciones del 150% para préstamos de soberanos, entidades del sector público, bancos y compañías de valores con clasificación menor a B- y en el caso de préstamos a empresas con clasificación menor a BB- y será aplicable también para aquellas porciones de conversión de activos financieros en valores que estén clasificadas entre BB+ y BB-, así como sobre la porción no garantizada de cualquier activo sobrevivido por más de 90 días deducidas las reservas.

Es responsabilidad del supervisor nacional encajar las evaluaciones en el marco estándar de ponderación de riesgos, proceso que debe ser objetivo y dar como resultado una asignación de ponderaciones de riesgo acorde con la asignación de nivel de riesgo crediticio de los préstamos que integran la cartera. Corresponde a los bancos escoger a la calificadora de riesgo y revelar por lo menos una vez al año qué entidad es la que efectúa el trabajo.

En este método se plantean fórmulas para mitigar el riesgo crediticio a través de la toma de colaterales, obtención de derivados crediticios o garantías, o la adopción de una compensación sujeta a un acuerdo de compensación de débitos por créditos. Los aspectos fundamentales tomados en cuenta para mitigar el riesgo de crédito son los siguientes:

Transacción con existencia de colateral: es aquella transacción en la que los bancos tienen una exposición crediticia o una exposición crediticia potencial con respecto a otra parte en virtud de dinero en efectivo o instrumentos financieros prestados o entregados como colateral, o un contrato de derivados extrabursátiles y el riesgo o riesgo potencial está total o parcialmente cubierto por colateral entregado por la contraparte.

Este colateral debe cumplir condiciones mínimas de seguridad, que se refieren al mecanismo legal mediante el cual es otorgado; poca correlación con el riesgo, es decir que no exista una correlación positiva entre la calidad de crédito del deudor y el valor del colateral; y, finalmente, un sólido proceso de gestión de riesgos que debe incluir estrategia, consideración del crédito subyacente, valoración, políticas y procedimientos, sistemas, control de los riesgos roll-off, y gestión de concentración generada por la utilización de colateral por el banco y su interacción con el perfil general de riesgo crediticio. Adicionalmente, el banco que desee mitigar el riesgo crediticio a través de colaterales deberá cumplir ciertos requisitos de divulgación de información.

Se establecen dos metodologías para el tratamiento del colateral. Una es a través de un enfoque global y la otra se denomina enfoque sencillo. Dependiendo de la calidad del colateral se aplican niveles menores de ponderación de riesgo para los préstamos así garantizados; sin embargo, ambas metodologías parten de las calificaciones de riesgo emitidas por las instituciones aprobadas.

Compensaciones en el Balance: Para reducir o mitigar el riesgo de crédito, los acuerdos de compensación de débitos por créditos dentro del balance, relacionados con préstamos a otras contrapartes y depósitos de otras contrapartes deben contar con base legal firme sobre la cual soportar la compensación; se pueden determinar en cualquier momento los activos y pasivos que están sujetos al acuerdo de compensación; el banco deberá controlar adecuadamente sus riesgos de refinanciamiento y las exposiciones sobre una base neta.

Garantías y Derivados Crediticios: Para otorgar alivio de capital a través de cualquier forma de garantía o derivado crediticio, debe contarse con la aprobación del supervisor bancario, en el sentido que este, esté convencido que el banco reúne las condiciones mínimas relacionadas con los procesos de gestión de riesgo y que la garantía o derivado crediticio es directo, explícito, irrevocable e incondicional.

El otro método para medir el riesgo crediticio se denomina Método fundado en la Clasificación Interna, los bancos tienen que

categorizar sus exposiciones en seis categorías generales de activos con diferentes características, así:

- (i) *exposiciones empresariales*
- (ii) *exposiciones bancarias*
- (iii) *exposiciones a bancos centrales*
- (iv) *exposiciones al detalle*
- (v) *exposiciones de financiamiento de proyecto*
- (vi) *exposiciones patrimoniales*

Para que un banco sea elegible para utilizar este método debe cumplir un conjunto completo de requerimientos mínimos en una base continua, por medio de los cuales se asegure la integridad y credibilidad del sistema de calificación. Estos requerimientos mínimos se relacionan con (a) diferenciación significativa de riesgo de crédito; (b) entereza e integridad de la asignación de calificación; (c) vigilancia de los sistemas y procesos de calificación; (d) criterios del sistema de calificación; (e) estimación de la probabilidad de incumplimiento; (f) recolección de datos y sistemas; (g) uso de calificaciones internas; (h) validación interna; (i) divulgación.

En este método las ponderaciones del riesgo se derivan de una función continua específica para cada categoría general de exposición, por lo que un activo ponderado por riesgo se define como la ponderación del riesgo de una transacción multiplicada por una medida de exposición para dicha transacción.

A través de este método se dan reglas específicas para medir el riesgo en cada uno de los niveles de exposición y resulta un método aplicable para aquellos bancos muy desarrollados y que han avanzado en la implementación de sus sistemas de administración de riesgos.

Con respecto al riesgo operativo, el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea lo define como el riesgo de pérdida directa o indirecta causada por una insuficiencia o falla de los procesos, gente y sistemas internos o por un acontecimiento externo. En esta definición se incluye el riesgo legal y se excluye el riesgo estratégico y de reputación para fines de un cargo de capital regulador mínimo relacionado con el riesgo operativo.

Para calcular los cargos de capital de riesgo operativo se plantean tres métodos en función de su sofisticación y sensibilidad al riesgo. Estos métodos son:

- El método del indicador básico
- El método estándar

- El método de medición interna

El método del indicador básico plantea que los bancos deben cubrir el riesgo operativo con un capital equivalente a un porcentaje fijo del ingreso bruto, definido este por la sumatoria del ingreso neto por concepto de intereses y el ingreso neto por otros conceptos, que debería reflejar el ingreso antes de deducir las pérdidas de operación. Está diseñado para ser utilizado por cualquier banco, independientemente de su complejidad o sofisticación.

En el método estándar las actividades de los bancos se dividen en unidades comerciales y líneas comerciales y para cada línea comercial hay un indicador amplio específico que refleja el tamaño o volumen de las actividades del banco en esa área particular y sirve como un valor sustitutivo aproximado de la cantidad de riesgo operativo en cada línea comercial. El cargo de capital se calcula multiplicando el indicador por un factor de capital asignado a cada línea comercial, el cual será fijado por los supervisores nacionales y sirve de valor sustitutivo aproximado de la relación entre la experiencia de pérdida por riesgo operativo de una línea comercial dada y el indicador para esa línea de toda la industria. El cargo total de capital se calcula sumando los cargos de capital regulador de cada una de las líneas comerciales.

Los bancos que opten por este método deben seguir las “Prácticas seguras para encarar el riesgo operativo del Comité de Basilea” y cumplir eficientemente normas para la gestión y control eficaces del riesgo y sistemas de medición y validación que permitan generar datos a ser utilizados en el cálculo del cargo de capital, elaborando y documentando criterios específicos para asociar las líneas y actividades comerciales actuales al marco estándar, el cual tendrá que ser continuamente revisado para que le sean incorporados las actividades comerciales y riesgos nuevos o cambiantes que desarrollen.

Finalmente se plantea también el Método de Medición Interna mediante el cual las actividades del banco se categorizan en las mismas líneas comerciales que en el método estándar y se define un conjunto amplio de tipos de riesgo operativo que se le aplica a todas las líneas comerciales. Dentro de cada combinación línea comercial/tipo de riesgo, el supervisor nacional determina un indicador de exposición que representa el valor sustitutivo del tamaño de la exposición al riesgo operativo de cada línea comercial con respecto al tipo de riesgo. Con esta información, los bancos miden, sobre la base de sus datos internos de pérdida, un parámetro que representa la probabilidad de una situación de pérdida y un parámetro que representa la pérdida dada esa situación. El

producto de los parámetros indicados anteriormente se utiliza para calcular la pérdida prevista.

Adicionalmente el supervisor proporciona un factor para cada combinación que convierte la pérdida prevista en un cargo de capital y su valor lo determinan los supervisores basándose en datos de toda la industria. El cargo de capital resulta de multiplicar ese factor con la pérdida prevista.

Resulta evidente que los bancos que optan por este método deben satisfacer todos los requisitos del método estándar y adicionalmente contar con normas de gestión y control eficaces del riesgo que garanticen la exactitud de los datos sobre pérdidas y aquellos bancos que no integren completamente una metodología de medición interna a sus actividades diarias y decisiones comerciales importantes no calificarán para este método.

Además, para la medición y validación los bancos deben demostrar el cumplimiento de estándares específicos para identificar, monitorear y controlar el riesgo operacional.

El riesgo de mercado, que resulta el tercer elemento de los requerimientos mínimos de capital, se aplica al **Libro Comercial**, definido como la suma de las posiciones en instrumentos y bienes financieros mantenidos con el propósito de comerciar o para resguardar otros elementos del libro comercial. Para ser incluidos dentro de este libro los instrumentos deben estar libres de toda estipulación restrictiva que afecte su intercambio, de modo que sirvan efectivamente de resguardo.

Se reconoce como instrumento financiero el contrato en virtud del cual se crea un activo financiero en una entidad y un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad.

El Nuevo Acuerdo de Capital brinda guías para la valoración prudente de las posiciones en el libro comercial, especialmente en aquellos casos de posiciones menos líquidas. El marco para las prácticas de valoración debe incluir, como mínimo, sistemas y controles adecuados que den a la dirección y a los supervisores la seguridad de que sus estimaciones de valoración son prudentes y confiables; metodologías de valoración; y el establecimiento de procedimientos para considerar ajustes o reservas de valoración que cubran como mínimo los costos de liquidación, los riesgos operativos, terminación anticipada, costos de inversión y financiamiento y costos administrativos futuros.

El tratamiento del capital por riesgos específicos en el libro comercial es consistente con los requerimientos de capital descritos en la parte de riesgo crediticio, estableciendo:

- *Cargos de capital por riesgo específico para valores del estado*
- *Cargos de capital por riesgo específico para posiciones cubiertas por derivados crediticios*

La indicación de que los cargos de capital por este concepto son consistentes con lo apuntado para el riesgo crediticio, se debe a que la ponderación de riesgo para el cálculo de tales cargos se basa en las evaluaciones externas de crédito emitidas por las instituciones evaluadoras.

EL SEGUNDO PILAR – PROCESO DE REVISIÓN DEL SUPERVISOR–

El Comité de Basilea claramente ha señalado que la revisión del supervisor bancario nacional es un complemento crítico a los requerimientos mínimos de capital, por lo que el segundo pilar del Nuevo Acuerdo de Capital pretende asegurar que cada banco tenga procesos internos sólidos, establecidos para asegurar la adecuación de su capital con base en una evaluación completa de sus riesgos, asignándole al supervisor la responsabilidad de evaluar qué tan bien llevan a cabo los bancos los procesos de adecuación de capital con relación a sus riesgos.

Busca fomentar un diálogo más activo entre los bancos y los supervisores, sin que se pretenda reemplazar el juicio y habilidad de la administración bancaria por la actuación de los supervisores bancarios, pues se entiende que la administración debe tener el más completo entendimiento de los riesgos que su institución afronta y que la adecuación de capital no es un sustituto de los procesos de control o manejo de riesgos adecuado.

A través de ese diálogo se pretende lograr que cuando se detecten deficiencias se tomen acciones rápidas y efectivas para restaurar el capital. Resulta entonces, que la importancia del examen del supervisor no se concreta a asegurar que los bancos posean el capital necesario, sino promover que los bancos elaboren y utilicen mejores técnicas de gestión de riesgos para controlar y manejar sus riesgos.

El Comité ha establecido cuatro principios claves del examen del supervisor, que son complemento a los “Principios Básicos para Supervisión Bancaria Eficiente y la Metodología de los Principios Básicos”. Los principios clave son los siguientes:

- Principio 1:** Los bancos deben tener un proceso de evaluación de la suficiencia de capital total con relación a su perfil de riesgo y una estrategia para mantener sus niveles de capital y deben demostrar que sus objetivos internos de capital han sido fijados sobre bases sólidas, teniendo presente la etapa particular del ciclo coyuntural en la que el banco está operando. Las cinco características de un proceso riguroso de evaluación incluyen (a) vigilancia por el directorio y personal directivo superior; (b) evaluación de capital bien sustentada en políticas y procedimientos diseñados para asegurar que el banco identifique y mida todos los riesgos importantes; (c) apreciación completa de todos los riesgos; (d) seguimiento e información; y (e) examen del control interno, incluyendo exámenes independientes por auditores externos para asegurar la integridad y exactitud de los procesos de valoración de capital.
- Principio 2:** Los supervisores deben examinar y evaluar las estrategias y valoraciones internas de la suficiencia del capital de los bancos, así como su habilidad para vigilar y asegurar la aplicación de los coeficientes de capital de supervisión. Estos exámenes deben incluir (a) examen de la propiedad de la evaluación del riesgo; (b) evaluación de la suficiencia del capital; (c) evaluación del ambiente de control; (d) examen supervisor del cumplimiento de normas mínimas; y (e) procedimientos claros para intervenir cuando los resultados de los exámenes no son satisfactorios.
- Principio 3:** Los supervisores deben esperar que los bancos operen por encima de los coeficientes mínimos de capital regulador y tener la habilidad de exigir a los bancos que mantengan capital en exceso del mínimo. Los supervisores tienen a su alcance varias formas de asegurar que los bancos individuales operen con niveles adecuados de capital fijando coeficientes de capital de activación y coeficientes objetivo, o bien puede definir categorías superiores a los coeficientes mínimos para identificar el nivel de capitalización del banco.
- Principio 4:** Los supervisores deben procurar intervenir temprano para evitar que el capital descienda por debajo de los niveles mínimos necesarios para cubrir las características de riesgo de un banco particular y exigir una acción correctiva inmediata cuando el capital no está en el nivel requerido o no es restaurado a ese nivel.

Otros aspectos incluidos dentro del proceso del examen supervisor se relacionan con la transparencia y responsabilidad de la supervisión,

reconociendo que es imposible evitar la presencia de elementos discrecionales en el mismo, por lo que el Comité claramente señala que los supervisores deben cumplir sus obligaciones con transparencia y responsabilidad y que los criterios utilizados por los supervisores para examinar las evaluaciones internas de capital de los bancos deben hacerse públicos, principalmente en aquellos casos en que deciden imponer requerimientos de capital por encima del mínimo a determinado banco.

En virtud que el riesgo de tipo de interés en la cartera de créditos no se incluye dentro de los requerimientos mínimos de capital y convencido de que es un riesgo potencialmente significativo que merece ser cubierto por capital, el Comité recomienda que este riesgo se evalúe dentro de este pilar y que cuando los supervisores establezcan que hay suficiente homogeneidad con respecto a la naturaleza de este riesgo y cuenten con métodos de seguimiento y medición, los insta a que establezcan un requerimiento de capital mínimo.

EL TERCER PILAR – DISCIPLINA DE MERCADO –

El tercer elemento del enfoque del Comité para la adecuación de capital es la disciplina de mercado, enfatizando en su importancia para reforzar la regulación de capital y otros esfuerzos de supervisión para la promoción de seguridad y solidez en los bancos y sistemas financieros.

En virtud que el Nuevo Acuerdo anticipa que se permitirá que los bancos utilicen metodologías internas para calcular los requerimientos de capital para el riesgo de crédito y operacional, se considera que la amplia divulgación es importante para que los participantes en el mercado entiendan las relaciones entre perfil de riesgo y el capital de una institución y, por lo tanto, su solidez.

En ese sentido, este pilar contiene recomendaciones sobre la divulgación de información, imponiendo, en algunos casos, requisitos de divulgación cuando se utiliza una metodología o instrumento en particular y con el fin de fortalecer este pilar se propone que todo banco esté obligado por el siguiente principio:

“Los bancos deben poseer una política formal de divulgación aprobada por el directorio. En esta política estarán determinados los objetivos y la estrategia del banco para la divulgación pública de información sobre su condición y rendimiento financieros. Además los bancos deben hacer efectivo un proceso para evaluar la propiedad de su divulgación, incluyendo la frecuencia de la divulgación.”

El nuevo acuerdo establece divulgaciones básicas, definidas éstas como aquellas que comunican información vital para todas las instituciones y son importantes para la operación básica de la disciplina de mercado. Así

también, señala que se requieren divulgaciones suplementarias para algunas instituciones, dependiendo del tipo de riesgos que asumen, la suficiencia del capital y los métodos utilizados para calcular el requerimiento de capital.

El Comité invita a los bancos a utilizar formatos uniformes para sus divulgaciones con el objetivo de fomentar la comparación, las que deben abarcar los aspectos siguientes:

- Divulgaciones con relación al ámbito de aplicación del Nuevo Acuerdo
- Divulgaciones con respecto a la estructura del capital
- Divulgaciones sobre riesgos y su evaluación

V. DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE EL ACUERDO 1988 Y EL NUEVO ACUERDO DE CAPITAL

Aún y cuando resulta claro y evidente que el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea es mucho más complejo y extenso que el Acuerdo de 1988 y que persigue medir en forma más estricta los riesgos que se asumen en las actividades bancarias, resulta conveniente resumir aquellas diferencias fundamentales entre ambos, para que se pueda observar de donde se debe partir para alcanzar la incorporación de un banco a este nuevo régimen de requerimientos de capital. Con ese propósito, a continuación se resumen tales diferencias desde los renglones más altos de ambos acuerdos.

A) OBJETIVOS

En el acuerdo de convergencia internacional de medición y estándares de capital publicada en 1998 se perseguía principalmente fortalecer la solidez y estabilidad del sistema bancario internacional a través de requerimientos de capital con un alto grado de consistencia en su aplicación para disminuir las desigualdades competitivas entre los bancos internacionales que participan en el mercado. En tanto el Nuevo Acuerdo, aparte de mantener ese objetivo extiende la cobertura de los requerimientos a los riesgos operacional y de mercado, le da una importancia fundamental a los exámenes de los supervisores y a la disciplina de mercado y propone su aplicación sobre bases consolidadas para eliminar el doble apalancamiento

B) APLICACIÓN

El nuevo acuerdo se aplicará en forma totalmente consolidada a todos los bancos internacionalmente activos sin excepciones, otorgando un período de transición de tres años para países en los que la consolidación no es actualmente un requisito. El acuerdo anterior dejaba este tema a discreción del ente supervisor. En ese sentido la consolidación abarcará filiales de valores y otras filiales financieras.

C) ESTRUCTURA

El nuevo acuerdo contempla tres “pilares”. El primero se refiere a requisitos de capital mínimo, único punto abordado en el acuerdo de 1988; el segundo y tercer pilar se refieren, respectivamente, a procesos del examen del supervisor y disciplina de mercado.

El acuerdo nuevo trata sobre el capital mínimo obligatorio total para riesgo crediticio, riesgo de mercado y riesgo operativo; a diferencia del anterior,

cuya estructura esta dirigida principalmente al capital mínimo relativo al riesgo crediticio.

Los procedimientos para la ponderación de riesgo crediticio en el nuevo acuerdo dejan de ser simples. Entre los aspectos relevantes se cita lo siguiente:

- El nuevo acuerdo cita dos métodos alternativos para el cálculo del requisito de capital mínimo en lo que respecta a riesgo crediticio, siendo estos:
 - ✓ El método estándar basado principalmente en la calificación que se haga del crédito la cual puede ir desde AAA hasta un crédito no calificado; los bancos podrán utilizar las calificaciones realizadas por instituciones de evaluación de créditos externas.
 - ✓ Por otro lado presenta el método Fundado en la Calificación Interna (FCI) en donde cada banco hará su propia categorización de las exposiciones de riesgo.
- En cuanto a la ponderación del riesgo para créditos no calificados, en algunos tipos de préstamos ésta llega al ciento cincuenta por ciento mientras que en la publicación anterior el máximo era el cien por ciento.
- El nuevo acuerdo contempla un apartado específico de mitigación del riesgo crediticio mediante la toma del colateral, hasta el punto que considera acuerdos de compensación de débitos y créditos en el balance.
- Como ya se mencionó anteriormente, el nuevo acuerdo incluye un cargo de capital por riesgo operativo citando cuatro métodos para su medición (el método del indicador básico, el método estándar, el método de medición interna y el del límite mínimo).
- El nuevo acuerdo introduce cargos de capital por posiciones mantenidas en instrumentos y bienes financieros (derivados), cuando las posiciones tomadas tienen el propósito de comerciar o de resguardar otros elementos del libro comercial, presentando dos metodologías de validación y orientaciones específicas.
- Los pilares adicionales del Nuevo Acuerdo de Capital se refieren a:
 - ✓ Proceso de examen de supervisor (segundo pilar del nuevo acuerdo), citando cuatro principios claves.
 - ✓ Disciplina de mercado (tercer pilar del nuevo acuerdo), basado en recomendaciones y requisitos de divulgación de información para las entidades bancarias.

VI. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL NUEVO ACUERDO PARA EL SISTEMA BANCARIO DE GUATEMALA

A) DESVENTAJAS

- La implementación se hace más compleja debido a que cualquiera los métodos deja de ser simple y se convierte en un método sumamente sofisticado.
- Por un lado, el método estándar se basa en calificaciones externas de crédito emitidas por instituciones especializadas que actualmente no funcionan en Guatemala. Además, el método fundado en la clasificación interna está sujeto a requisitos para los cuales, ni los bancos ni la Superintendencia de Bancos están preparados, como la introducción de esquemas de diferenciación significativa de riesgos y la necesaria estimación de probabilidades de incumplimiento. La aplicación de estos métodos en países con economías emergentes se encuentra limitado, según el caso, por los factores siguientes:
 - ✓ Acceso a la calificación de riesgos por entes externos reconocidos;
 - ✓ Transparencia de la información de los deudores;
 - ✓ Limitaciones en cuanto a la calidad y uso de la información con mayor impacto en el desarrollo de mediciones internas (método FCI) y de mercado;
 - ✓ La disponibilidad de capital de respaldo, la cual se ve afectada por la situación de nuestras economías.

Cuando las calificaciones se basan en evaluaciones externas es conveniente recordar que ninguna calificación particular debe ser mejor o superior que la brindada al país. En ese sentido, las calificaciones de la totalidad de las empresas de Guatemala son inferiores a las del país, la que ya de por sí es inferior a los principales socios comerciales regionales.

- Quizás la mayor desventaja del Nuevo Acuerdo para el sistema financiero de Guatemala no es interna sino más bien de su aplicación a los bancos internacionales que conceden préstamos a bancos y empresas guatemaltecas, porque al evaluar el riesgo de esta cartera, serán medidos en función del riesgo país y por lo tanto requerirán mayor capital para concederlos, lo que afectará el volumen de oferta crediticia de la banca corresponsal y la tasa de interés, reduciendo una fuente importante de recursos prestables, el margen de intermediación y nuestra competitividad con respecto a otros bancos del área.

- Si derivado de la complejidad del acuerdo, el sistema bancario decidiera tratar de posponer la adecuación de sus prácticas de valuación y manejo de riesgo a esta normativa, se estaría aislando del resto del mundo, en la medida en que el acuerdo vaya siendo adoptado por unos bajo el convencimiento de que el quehacer bancario actual necesita basarse en estos principios y por otros, por la coerción de entes supervisores fuertes, avalados por el consenso general de que las de crisis bancarias acaecidas anteriormente en sus respectivas plazas, no deben repetirse.

B) VENTAJAS

- El pilar tres, Disciplina de Mercado, mediante divulgaciones hace llegar información relevante a los agentes económicos de tipo cuantitativo y cualitativo.
- El nuevo acuerdo llevará a los bancos a poner una atención especial y a desarrollar aun más sus habilidades para gestionar sus propios riesgos, en donde la auditoría interna y externa jugaran un papel importante en cuanto al examen del sistema de calificación.
- La nueva publicación de Basilea orienta en cuanto a la práctica de temas nuevos para países como el nuestro, tales como la gestión del riesgo operativo en la que se mencionan las principales líneas para su administración.
- El nuevo acuerdo orienta a los participantes en mercados financieros, como los nuestros, respecto a la importancia de la gestión de riesgos, la supervisión de requerimientos mínimos y la divulgación de información.
- Define claramente el papel del supervisor dentro del proceso de evaluación de la adecuación de capital.
- No cabe duda que fomenta la aparición de instituciones calificadoras de riesgo en nuestro país, lo que permitirá el desarrollo del mercado de capitales.
- Es indudable que conlleva la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad como principios para el registro de todas las operaciones.
- Permitirá que Guatemala se adapte a los estándares internacionales en materia de adecuación de capital y que la Superintendencia de Bancos eleve su nivel de profesionalización para atender los nuevos retos que en materia de supervisión plantea el nuevo Acuerdo.

- No obstante el nuevo acuerdo pareciera no aplicable de inmediato en nuestro medio, existen aspectos que cada banco local puede aprovechar en su propia gestión de riesgos tales como lo relativo a la gestión de riesgo operativo y las pruebas de tensión.
- Desde el punto de vista estratégico, la ausencia de condiciones para una adopción inmediata de los principios del nuevo acuerdo, permitiría al sistema bancario plantear a las autoridades correspondientes un programa gradual de incorporación de prácticas obligatorias que, dentro de un calendario definido, vaya incorporando los principios de Basilea, hasta concluir con la incorporación total de tales principios a las prácticas locales de evaluación de riesgo y readecuación del capital bancario.

VII. EL NUEVO ACUERDO DE CAPITAL DE BASILEA Y EL MARCO JURIDICO GUATEMALTECO VIGENTE (Ley de Bancos y Ley Orgánica del Banco de Guatemala)

El análisis del contenido del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea ha permitido establecer que su adopción en cualquier país requiere de un marco jurídico flexible, adaptable a los nuevos requisitos para medir la adecuación de capital de las instituciones bancarias. En efecto el Nuevo Acuerdo de Capital plantea requerimientos de capital diferentes en función de la calificación emitida por entes externos o por medios internos en el caso del riesgo de crédito y requerimientos adicionales para resguardar los riesgos de operación y de mercado y que la adecuación de capital se realice en forma consolidada para evitar el doble apalancamiento.

Adicionalmente, se debe contar con normas claras que faciliten la divulgación de los distintos métodos que los bancos decidan utilizar para adecuar su capital, así como sobre las instituciones que tendrán la responsabilidad de emitir las calificaciones sobre la calidad de su cartera, si se adopta el método estándar. Por otra parte, resulta fundamental la capacidad del órgano supervisor para asegurar que, como ya se indicó en el apartado anterior, cada banco tenga procesos internos sólidos para evaluar la adecuación de su capital en una evaluación completa de sus riesgos y con las suficientes facultades para tomar las medidas correctivas en aquellos casos en que una institución no posea esos procesos internos sólidos a criterio del propio ente supervisor.

En ese sentido, al analizar el marco jurídico actual sobre el particular se establece lo siguiente:

Pilar 1: Requerimientos de Capital

El artículo 20 de la Ley de Bancos señala que el monto del patrimonio requerido es del 10% sobre los activos y contingencias, porcentaje que podrá ser aumentado con el voto favorable de dos terceras partes de los miembros que integran la Junta Monetaria a solicitud de la Superintendencia de Bancos.

En la parte final del mismo artículo se estipula que el patrimonio computable de una institución bancaria es la suma del capital primario más el capital complementario, menos el capital asignado a sucursales y las inversiones en acciones de bancos, sociedades financieras privadas y sociedades de servicios financieros. El capital primario se integra por el capital pagado, otras aportaciones permanentes, la reserva legal, las ganancias por aplicar de ejercicios contables anteriores después de impuestos y las aportaciones del Estado en los casos de bancos estatales.

El capital complementario se integra por las ganancias del ejercicio, el superávit por revaluación de activos, otras reservas de capital e instrumentos de deuda convertible en acciones y deuda subordinada contratada a plazo mayor de cinco años.

También se señala que el capital complementario es aceptable como parte del patrimonio computable hasta por la suma del capital primario y la deuda subordinada únicamente puede computarse hasta por el 50% del capital primario.

Como puede notarse la legislación bancaria vigente esta fundamentada en el Acuerdo de Capital de 1988, midiendo la adecuación de capital en función de un factor rígido de riesgo (10%) y aunque existe la posibilidad que la Junta Monetaria eleve ese porcentaje, no parece suficiente para adaptarlo a los nuevos requisitos que, como ya se indicó, parten de una evaluación caso por caso de la cartera de créditos. Conviene mencionar en esta parte lo que ya se indicó en el apartado II del presente documento, que dentro de las ponderaciones de riesgo, existe una gran debilidad al medir con 0% del 10% del requerimiento de capital para los Gastos Diferidos por Amortizar por las razones expuestas.

Por otra parte, resulta claro que no existe la posibilidad legal de requerir capital en función del riesgo operativo y el riesgo de mercado. Se puede argumentar en el caso del riesgo de mercado que las operaciones que sobre esa área realizan los bancos de Guatemala no son tan sofisticadas y que es suficiente el requerimiento desde el punto de vista de la ponderación de riesgo, pero lo que sí resulta evidente es que los requerimientos en función del riesgo operacional no se pueden eludir y que deberían incorporarse para que la adecuación de capital se realice con base en estándares internacionales, lo que hace necesario introducirle nuevas modificaciones al marco legal actual para darle certeza al nuevo marco de medición de capital.

La separación del patrimonio computable en capital primario y complementario, así como las deducciones y limitaciones que se plantean son consistentes con el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea, excepto por los comentarios que se presentaron en el apartado II de este documento con relación a la incorporación de las ganancias de ejercicios anteriores como parte del capital primario y de las ganancias del ejercicio como parte del capital complementario. También es conveniente señalar que las deducciones al patrimonio computable, en lo que se refiere a inversiones de los bancos en acciones de otros bancos, de sociedades financieras privadas y de sociedades de servicios financieros, impiden el doble apalancamiento, uno de los objetivos principales del Nuevo Acuerdo de Capital.

La debilidad más importante de nuestra legislación es que no prevé la consolidación y por lo tanto no se alcanza la adecuación de capital consolidada y este aspecto hace necesaria la reforma integral de la legislación financiera de Guatemala para adaptarla a un escenario consolidado que permita establecer con razonabilidad que el capital del grupo financiero es suficiente para hacer frente al riesgo asumido en todas las operaciones de riesgo relacionadas. Tampoco se cuenta con mecanismos legales que obliguen a las instituciones bancarias a crear, dentro de sus estructuras organizacionales, dependencias para medir, evaluar y manejar los distintos riesgos a que están expuestas y posibilitar la creación de bases confiables para emitir calificaciones internas de los deudores que conforman su cartera de crédito.

Pilar 2: Proceso de Revisión del Supervisor

Las facultades que la legislación otorga al órgano supervisor de Guatemala (La Superintendencia de Bancos) se encuentran contenidas fundamentalmente en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Bancos de Guatemala, específicamente en el inciso b) en el que se indica lo siguiente:

“Dictar en forma razonada, las instrucciones o recomendaciones tendientes a subsanar las deficiencias o irregularidades que encontrare, por infracciones a disposiciones legales o reglamentarias y adoptar las medidas que sean de su competencia o solicitar la emisión de aquellas que sean responsabilidad de otras autoridades.....”

La otra disposición legal fundamental para el proceso de revisión del supervisor en materia de adecuación de capital esta contenido en el artículo 21 de la Ley de Bancos, en el cual se señala lo siguiente:

“Si las inversiones a que se refiere el artículo anterior fueren de recuperación dudosa, a criterio del Superintendente de Bancos, éste deberá ordenar, en cada caso, la constitución de reservas o provisiones especiales en proporciones que excedan de los porcentajes que señala dicho artículo, con el fin de cubrir el riesgo en la medida necesaria.”

Al analizar estas disposiciones legales, parecería que la Superintendencia de Bancos cuenta con el instrumental legal necesario para lograr que su examen se convierta en un efectivo segundo pilar del proceso de adecuación de capital; sin embargo, es conveniente señalar que, para que las instrucciones que tiene facultad de emitir sean de cumplimiento obligatorio por las instituciones, deben estar relacionadas con infracciones a alguna disposición legal o reglamentaria. Esto implica que para que las instrucciones sean efectivas es necesario incorporar disposiciones que puedan ser infringidas, lo que hace imprescindible modificar la Ley de Bancos, para que el examen del ente supervisor y sus recomendaciones en materia de adecuación de capital se conviertan en instrucciones de carácter obligatorio para las instituciones bancarias.

Lo que sí resulta un buen instrumento de supervisión es el artículo 21, a través del cual el Superintendente de Bancos estaría en la posibilidad de incrementar los requerimientos si, a su juicio, las inversiones son de recuperación dudosa, lo que le permitiría hacer requerimientos adicionales en aquellos casos en que la calificación de riesgo de cualquier inversión así lo requiera. Evidentemente, no es suficiente este artículo para hacer requerimientos para cubrir los riesgos de mercado y operacional.

Quizás lo más importante, no es tanto si legalmente la Superintendencia de Bancos tiene la facultad para hacer efectivo su proceso de revisión, sino más bien si el órgano supervisor esta capacitado técnicamente para desempeñar el papel que le asigna el Nuevo Acuerdo de Capital.

Pilar 3: Disciplina de Mercado

Este es el aspecto que menor cobertura tiene dentro del marco legal vigente y en el que se considera que hay que trabajar más profundamente para alcanzar los estándares que propone Basilea. Las divulgaciones del sistema bancario se rigen por el Reglamento sobre Divulgación de Información de Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos aprobado por la Junta Monetaria mediante resolución JM-179-99; sin embargo, este resulta insuficiente para alcanzar los niveles de divulgación que requiere el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea.

VIII. EL NUEVO ACUERDO DE CAPITAL DE BASILEA Y LOS PROYECTOS DE LEY APROBADOS POR LA JUNTA MONETARIA (Ley de Bancos y Grupos Financieros y Ley de Supervisión Financiera)

El proyecto de Ley de Bancos y Grupos Financieros pretende adaptar el marco jurídico que regula a las instituciones bancarias a las nuevas corrientes que en esta materia han surgido internacionalmente, extendiéndola a otras empresas que realizan operaciones de servicios financieros siempre y cuando estén organizadas en grupos financieros de conformidad con lo estipulado en el proyecto.

Aún y cuando existen muchos tópicos sobre los que se puede emitir comentarios acerca de las debilidades que plantea el proyecto, en esta oportunidad el análisis se refiere a aquellas partes que se relacionan con la adecuación de capital y las facultades del órgano supervisor para hacer efectivos los procesos de supervisión sobre el particular, con el propósito de establecer si es consistente con el contenido del Nuevo de Capital de Basilea en esa materia. Se reitera que el análisis es única y exclusivamente sobre estos temas y desde ningún punto vista es una confirmación sobre que el resto del proyecto esté apegado a estándares internacionales para una supervisión bancaria efectiva.

En ese sentido, se efectuó la evaluación en función de los tres pilares en que descansa el Nuevo Acuerdo, en la misma forma que el apartado anterior, así:

Pilar 1: Requerimientos de Capital

En esa materia los requerimientos de capital para enfrentar el riesgo de crédito son exactamente los mismos que contiene la ley vigente, aplicables exclusivamente a las instituciones bancarias y por lo tanto, no extensivas a otros entes tomadores de riesgo dentro de un grupo financiero. Tampoco resuelve de manera alguna el problema que plantea que los Gastos Diferidos por Amortizar se les pondere con 0% de riesgo, cuando son cantidades erogadas cuya recuperación es totalmente nula.

Mantiene el porcentaje de 10% como monto de patrimonio requerido sobre activos y contingencias, lo que impediría la aplicación de requerimientos con base a calificaciones externas o internas, dependiendo del método que elija la institución bancaria. Adicionalmente conviene mencionar que elimina la facultad que la ley actual brinda a la Junta Monetaria para incrementar el porcentaje en función del riesgo a solicitud de la Superintendencia de Bancos.

Por estas razones, el proyecto de ley parece que implica un retroceso y en ningún momento plantea mejoras para adaptar nuestra legislación a estándares internacionales. Evidentemente, tampoco hay mecanismos

ágiles para incorporar los riesgos de mercado y operacional a los procesos de adecuación de capital.

En lo que se refiere a la conformación del patrimonio computable en capital primario y capital complementario sí se introduce un avance significativo, pues transfiere las ganancias de ejercicios anteriores del capital primario al capital complementario, dándole la connotación de Reservas no Divulgadas que señalan los Acuerdos que sobre capital ha emitido y está por emitir el Comité de Basilea para supervisión bancaria. Con relación a las deducciones al patrimonio computable se mantiene el criterio de reducirlo con el valor que represente la inversión del banco en acciones de otros bancos, sociedades financieras privadas y sociedades de servicios financieros, logrando evitar de esta manera el doble apalancamiento.

Si bien es cierto el proyecto de ley habla de grupos financieros, de supervisión consolidada para que los riesgos que puedan afectar al banco sean evaluados y controlados sobre una base por empresa y global, así como de la obligación de consolidar estados financieros, cuando el proyecto se refiere a la adecuación de capital consolidada, se incurre en el tremendo error al señalar que *“La empresa controladora o la empresa responsable deberá consolidar mensualmente los estados financieros de las empresas que integran el grupo financiero y hacer que se mantenga permanentemente por lo menos el monto legal mínimo de patrimonio que requiera a cada una de ellas las leyes que les sean aplicables.”* Esto implica que la única institución que estaría afecta al marco de requerimientos de capital será el Banco y el resto de empresas no. Se tendrá un dato de capital consolidado que no tiene utilidad, pues la adecuación se mide individualmente y las empresas no bancos se rigen por los mínimos establecidos en las leyes comerciales.

Por otra parte, no obstante que los procedimientos de adecuación de capital quedan atados a un porcentaje de ponderación que no facilita la aplicación de criterios de calificación externos o internos, en el proyecto se incluye un capítulo denominado Administración de Riesgos y en uno de sus artículos se indica que *“Los bancos y las empresas que integran grupos financieros deberán contar con procesos integrales que incluyan, según el caso, la administración de riesgos de crédito, de mercado, de tasas de interés, de liquidez, cambiario, de transferencia, operacional y otros a que estén expuestos, que contengan sistemas de información y un comité de gestión de riesgos, todo ello con el propósito de identificar, medir, monitorear, controlar y prevenir los riesgos”*. No cabe duda que este es un buen avance del proyecto, pues obliga a las instituciones a montar la infraestructura que les permita contar en el mediano plazo con sistemas de calificación interna; sin embargo, conviene mencionar que este esfuerzo debe ir acompañado de otros en materia de mejorar la

información de los deudores, principalmente en lo que se refiere a que los estados financieros que emitan las entidades prestatarias sean preparados de conformidad con Normas Internacionales de Contabilidad.

Pilar 2: Proceso de Revisión del Supervisor

Al analizar el proyecto de Ley de Supervisión Financiera se observa claramente que el órgano supervisor mantiene su dependencia directa de la Junta Monetaria y que carece de facultades amplias para reglamentar. Aunque los bancos han sostenido el criterio de que es conveniente mantener una total separación entre la función de normar y la de velar porque la normativa se cumpla, haciendo un paralelo con el principio de independencia de poderes de las sociedades democráticas, lo cierto es que este criterio contraviene frontalmente el espíritu del principio del Comité de Basilea concerniente a la total independencia y amplias facultades normativas que, a juicio del Comité, deben tener los órganos fiscalizadores.

Dentro de la Ley de Bancos y Grupos Financieros se elimina la facultad del Superintendente de Bancos para que, a su juicio, se pudiera requerir más capital en aquellos casos de inversiones calificadas como de recuperación dudosa. Aunque el contenido general que contiene la Ley de Supervisión Financiera parece facultarlo para actuar en esta forma, siempre resulta muy conveniente contar con normas específicas y explícitas sobre la materia, cuyo uso, en virtud de estar basada en el criterio de la autoridad, para que sea inobjetable por parte de las instituciones afectadas.

Lo anterior implica que el proyecto de ley no fortalece la posición de la Superintendencia de Bancos, y no se alcanza completar las bases del trípode sobre el que, según Basilea descansa la autoridad real de cualquier institución supervisora como lo son la independencia, legal, moral y técnica. En tanto no se dote a la Superintendencia de Bancos de capacidades reglamentarias directas, la normativa Guatemalteca no podrá ser considerada como ajustada a los principios de Basilea en esta materia.

Pilar 3: Disciplina de Mercado

En esta materia no se advierten cambios sustanciales sobre los mecanismos de divulgación de información bajo la responsabilidad de las instituciones y del órgano supervisor. Quizás lo importante es señalar que cuando en los proyectos de ley se habla de publicaciones tanto a cargo de las instituciones como del órgano supervisor, se indica que deben contener información veraz, calificativo que dará más de algún problema a los responsables de la publicación, desconociéndose las implicaciones de publicar información con errores involuntarios

Es evidente que para la elaboración de estos proyecto de ley no se tomaron en cuenta los diferentes documentos que ha emitido y está por emitir el Comité de Basilea, siendo muy conveniente que antes de su aprobación por el Organismo Legislativo sean sometidos a un proceso riguroso de revisión que permita que estas nuevas leyes sean aplicables en el largo plazo y se evite que necesariamente sean modificadas cuando se produzca algún cambio en los estándares internacionales.

IX. CONCLUSIONES

- A. La medición de la adecuación de capital de las instituciones bancarias por medio del Nuevo acuerdo de Capital de Basilea es más compleja y sofisticada que la medición que se realiza con base en el Acuerdo de 1988, al cual se encuentra adaptada con algunas debilidades la legislación de Guatemala.
- B. El Nuevo Acuerdo de Capital plantea un mecanismo muy diferente al actual, basado en calificaciones externas o mediciones internas, para establecer el riesgo de crédito caso por caso, lo que fomenta el apareamiento de instituciones calificadoras de riesgo, o bien la implementación de estructuras organizacionales con dependencias responsables de administrar el riesgo para construir sistemas de información adecuados para alcanzar calificaciones internas, ante la carencia de instituciones calificadoras de riesgo externas.
- C. La legislación vigente requiere de modificaciones profundas para adaptarse a los requisitos que plantea el Nuevo Acuerdo de Basilea, fundamentalmente en los criterios para definir el capital mínimo y en los mecanismos para medir la adecuación de capital sobre bases consolidadas. El marco actual refleja debilidades con respecto al Acuerdo de 1988 que merece se resuelvan.
- D. Los proyectos de ley aprobados por la Junta Monetaria previo a su traslado al Congreso de la República no contemplan mecanismos para adoptar el esfuerzo que en materia de regulación de capital está realizando el Comité de Basilea, no obstante el grado de participación que sobre el particular han tenido los organismos supervisores y las federaciones de bancos a nivel mundial.
- E. El sistema bancario no está preparado para adoptar este sistema de medición, por lo que resulta importante que desarrolle un plan que le permita alcanzar una estructura acorde a esas necesidades para cuando el Acuerdo finalmente esté implementado, alrededor del año 2004.
- F. Finalmente, es relevante mencionar que el Acuerdo requiere de un órgano supervisor suficientemente calificado desde el punto de vista técnico y con la suficiente capacidad legal que permita convertirse en ese complemento crítico a los requerimientos mínimos de capital y disciplina de mercado, aspecto que tanto en el marco legal vigente como en los proyectos de ley tiene serias limitaciones.

X. RECOMENDACIONES

A) HACIA LO INTERNO DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS

1. Incorporar a sus estructuras organizacionales dependencias que administren, manejen y controlen los distintos riesgos a que está expuesto el negocio bancario, con el propósito de implementar sistemas de información para calificar internamente a cada uno de los deudores que integran su cartera de crédito.
2. Iniciar procesos de consolidación de operaciones con las empresas que integran el grupo financiero y establecer la posición patrimonial consolidada inicialmente con base al acuerdo de 1988, para establecer las necesidades de capitalización y alcanzar el monto mínimo en el plazo de gracia para la aplicación del Nuevo Acuerdo.
3. Para lograr mejoras en sus sistemas de información requerir a sus principales prestatarios la presentación de estados financieros elaborados de conformidad con Normas Internacionales de Contabilidad, y lograr que éstos sean comparables con estados financieros emitidos en otras partes del mundo. Las Normas Internacionales de Contabilidad son un requisito fundamental para que una empresa sea sujeto de calificación por una institución calificadora de riesgo.
4. Resulta imprescindible la profesionalización de las administraciones de la banca para que sea fortalecida la evaluación del riesgo, principalmente en lo que se refiere al riesgo de mercado y operacional.
5. Crear las condiciones de transparencia y de disciplina de mercado que hagan atractiva la participación de calificadoras de riesgo internacionales en el país y que se obtengan calificaciones emitidas por instituciones independientes similares a las que algunos bancos han obtenido en el país.
6. Como Asociación, promover campañas de divulgación y capacitación de los alcances y contenidos de los documentos emitidos por el Comité de Basilea, para asegurar su adopción y adecuada comprensión.

B) EN SUS RELACIONES CON LAS AUTORIDADES DE SUPERVISION Y LEGISLACION

1. Mantener puentes de comunicación adecuados con el órgano supervisor, dado el rol crítico que jugara la Superintendencia de Bancos dentro del marco del Nuevo Acuerdo.
2. Requerir la revisión profunda de los proyectos de ley a efecto de garantizar que contienen los requerimientos planteados por el Comité de Basilea, no solo en lo que se refiere al Nuevo Acuerdo de Capital, sino con relación a los Principios emitidos para una Supervisión Bancaria Efectiva, como único medio para lograr reducir el riesgo país que se ve incrementado por un marco débil en materia de regulaciones bancarias y minimizar el riesgo de incremento de los costos en las operaciones internacionales. Los principios emanados del Comité de Basilea, son lineamientos generales, por lo que debe velarse que la legislación bancaria recoja su espíritu, pero también que en el terreno práctico las normas locales no acarreen costos innecesarios para los bancos y para la sociedad. En otras palabras, los bancos deben de elevar a las autoridades correspondientes iniciativas que incorporen a las leyes bancarias los principios de Basilea, en la forma en que resulte más eficiente y menos costoso llevarlos a la práctica.
4. Participar activamente en la elaboración y discusión de las modificaciones a la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, instrumento indispensable para medir el riesgo de mercado y la actuación de las instituciones calificadoras de crédito.

C) EN EL ORDEN INTERNACIONAL

1. Participar activamente en los procesos de capacitación que internacionalmente promueve el Comité de Basilea y la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas en coordinación con la Federación Latinoamericana de Bancos.
2. Establecer contactos y vínculos de comunicación que permitan conocer el grado de implementación que estas reformas llevan en otros países, principalmente en aquellos que resultan socios comerciales de Guatemala y que podrían generar competencias inconvenientes para el sistema financiero guatemalteco.
3. Dar a conocer los avances a los Organismos Internacionales pertinentes y a la banca corresponsal.

Guatemala, mayo de 2001

BanConsult, S.A.